El Salvador

CIDAI
CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Proceso
informativo semanal

Año 27, Nº 1202
Julio 19, 2006
ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial 2
Opciones políticas destructivas

Político 4
Inconsistencias de la Ley de armas

Político 6
Los movimientos políticos de cara a 2009

Económico 8
Condiciones económicas y violencia política

Social 10
Las políticas gubernamentales de Saca

Reporte IDHUCA 12
Una "cloaca" por destapar

Comentario 14
Que el pueblo de Dios haga sentir su voz en la V Conferencia de Obispos de América Latina en Aparecida, Brasil

editorial

Opciones políticas destructivas

La dirección que el gobierno de Saca y ARENA, por un lado, y el FMLN, por el otro, han dado al curso de la política nacional es alarmante. Esto no ha pasado desapercibido para algunas instituciones sociales, que han advertido el peligroso rumbo que esas dos fuerzas le han impreso a la vida nacional. El gobierno de Saca y ARENA han encontrado la oportunidad que esperaban para, sin violentar formalmente la legalidad del Estado, abrir la posibilidad para ilegalizar al FMLN, si así lo estimaran conveniente para sus planes. Si dieran este paso extremo, este partido quedaría al margen de la política institucional. Junto a esta posibilidad, han abierto otra, aunque más remota, de desaforar a los diputados del FMLN, vinculados a las protestas violentas y a los disturbios del 5 de julio. En teoría, la ilegalización del FMLN haría desaparecer el obstáculo que representa su actividad opositora partidaria y permitiría al gobierno perseguirlo, en cuanto organización ilegal, y, además, armada y de máxima peligrosidad para la seguridad nacional, lo cual permitiría catalogarlo como grupo terrorista. Hacia aquí apunta la ley sobre esta materia. La ilegalización significaría también que el FMLN no podría participar como tal en las próximas elecciones, con lo cual el campo quedaría libre para ARENA y sus aliados. Finalmente, colocaría a los miembros del partido a la defensiva.

La jugada política es maestra. Pero, en la práctica, lo más probable es que el gobierno de ARENA no se atreva a tanto, por la conmoción interna y externa que una acción de esta naturaleza suscitaría. Aun así, las condiciones están dadas para ello. Con todo, no hay que descartar la posibilidad de la ilegalización, dada la influencia que los sectores más extremistas del partido y del gran capital tienen sobre las decisiones del presidente Saca y dada su desesperación por el estancamiento que experimenta la Asamblea Legislativa. Despojar del fuero a los diputados es más complicado, porque ARENA no posee el voto calificado necesario. La intención inmediata del gobierno parece ser otra. Amenazar al FMLN y colocarlo a la defensiva, para obligarlo a ceder en sus posturas más extremas. En un primer momento, el gobierno de Saca buscaría la aprobación de varios préstamos multilaterales, detenidos por ese partido, y la aprobación rápida del presupuesto del año próximo. La jugada política no deja de ser hábil, aunque también pone de manifiesto la perversidad de la política nacional. Esta estrategia desenmascara las verdaderas intenciones del discurso de la unidad nacional del presidente Saca del 1 de junio de este año. Ya no cabe ninguna duda de que el gobierno no está interesado en ella, ni siquiera se muestra dispuesto a trabajar para acercarse a su adversario político principal, sino que su objetivo es destruirlo.

El FMLN, por su lado, también optó por la confrontación sistemática, ante la impotencia para avanzar en el terreno electoral. Todavía no ha controlado ninguna legislatura y su meta última, el poder ejecutivo, está aún lejana. La participación en la política institucional no le ha resultado tan fácil como tal vez pensó, cuando aceptó formar parte de ella. Es probable que en sus proyecciones entrara acceder pronto al poder del Estado, dada su popularidad y la justeza de su causa revolucionaria. Así, el antiguo enemigo militar, quedaría derrotado

en las urnas, de manera aplastante. Una elección tras otra ha demostrado que el FMLN no cuenta con el apoyo electoral necesario para alcanzar sus metas. En lugar de analizar con rigor sus debilidades, trasladó la responsabilidad al poderío electoral de ARENA, en lo cual no le falta razón. Pero pese a que ese poder es avasallador, y con frecuencia recurre a la ilegalidad, el factor fundamental que le niega el triunfo en las urnas es la ausencia del apoyo masivo del cuerpo electoral. La dirigencia del FMLN se resiste a reconocer que aun cuando defiende los intereses populares, el pueblo no vota masivamente sus candidaturas.

A raíz de la elección presidencial de 2004, la cual estaba seguro de ganar, el FMLN optó por la confrontación abierta con ARENA y su gobierno. Intensificó sus ataques y provocaciones. Simultáneamente, algunos de sus dirigentes anunciaron planes para sacar a la población a la calle y reclamar aquello que se les negaba en las urnas y en la lucha política. La protesta callejera, más o menos agresiva e incluso violenta, se volvió común. Las estructuras del partido y las instituciones gubernamentales a su cargo fueron puestas al servicio de este plan. En la Asamblea Legislativa, la oposición fue consistente, pues tuvo poder de veto, excepto en los últimos meses. En el interior del partido, reforzó la obediencia a la línea de su dirección. Las candidaturas para las elecciones legislativas y municipales de este año fueron sometidas a examen riguroso para garantizar la fidelidad a la dirigencia.

El FMLN organizó fuerzas de choque para la protesta callejera, las cuales han sido reforzadas con pandilleros del gran San Salvador, quienes tienen sus razones para ajustar cuentas con la policía. Esta combinación de violencia política con violencia juvenil es explosiva. Asimismo, es una señal de que el FMLN no tiene suficiente población como para alimentar sus protestas callejeras. No cabe duda que puede perturbar en gran medida la vida de la capital, pero no con un respaldo popular masivo. Es una lucha librada en nombre del pueblo salvadoreño, pero que éste observa con indiferencia y no pocas veces con temor. En lugar de conseguir adeptos, el FMLN los ahuyenta. En la medida en que el FMLN endureció sus posiciones, ARENA hizo otro tanto. Si los dos continúan por la ruta del encontronazo, el FMLN reaccionará de forma violenta y es probable que los peores presagios de ARENA se cumplan. Es decir, que la violencia política se desate con toda su crudeza. Asimismo, es probable que los cálculos de ARENA incluyan esta explosión, la cual le daría la oportunidad para acabar de una vez por todas, por la vía represiva, con su odiado enemigo histórico. El costo en vidas humanas, en pérdidas económicas y en desestabilización social le parece poco en comparación con la posibilidad de detentar, por fin, el poder total.

Inconsistencias de la Ley de armas

La Ley de armas y explosivos ha sido objeto de un constante debate en el transcurso del año. De hecho, los diputados de los partidos de derecha intentaron, en enero recién pasado, aprobar una serie de reformas a la mencionada ley, aprovechándose de la mayoría con la cual contaban en la Asamblea Legislativa. El diputado de ARENA, Guillermo Gallegos, argumentó en esa oportunidad que dichas reformas buscaban sancionar "el uso irresponsable de las armas", pues "se trata de volver más difícil obtener o comprar un arma", para contribuir a "una cultura de paz".

Ciertamente, las reformas que se pretendían impulsar ponían una serie de requisitos, tales como solvencias del fisco, para hacer más engorroso el proceso de adquisición de un arma. Sin embargo, los límites que establecían no eran tranquilizadores: un ciudadano que cumpliera con los requisitos podía comprar hasta dos armas en un mismo año. Entonces, las limitaciones no lo eran tanto. Con una sola pistola en poder de un civil cualquiera, ya podemos hablar de un peligro potencial para la sociedad.

Aunque se establezcan mayores requisitos para poder matricular un arma, cabría preguntarse si con esto es suficiente para desmotivar la posesión de armas de fuego. El Ministerio de Defensa ha extendido 202,593 permisos para portar armas. De estas, 106,805 permisos han caducado y sus portadores no se han preocupado por renovarlos. Las sanciones por portar armas con matrícula vencida son risibles: el infractor debe pagar una multa de $ 57.14, similar a la de una infracción de tránsito grave. Es decir, no es una sanción que esté acorde a la gravedad de la falta. Portar un arma con la licencia vencida no es un delito penal, sino algo que se resuelve mediante un trámite burocrático relativamente simple.

El planteamiento que está en el fondo de este tipo de reformas es que basta con legalizar un arma para que el uso de la misma sea (o se pretenda) legítimo. Según este razonamiento, bastaría con que las armas que están en manos de los civiles estén en un listado, amparado en la ley, para impedir que se usen en actos delincuenciales. Con los requisitos que se piden, se supone que un pandillero no podrá inscribir las armas que posee y que automáticamente estará cometiendo una infracción.

Ese es un enfoque deficiente de la violencia perpetrada con armas de fuego (que no es, ni de lejos, el único tipo de violencia que se da en el país). El registro de armas legaliza, pero no garantiza el "buen uso" (si es que puede haber alguno) de las armas en cuestión. Un ciudadano que posee un arma registrada puede usarlo, en un momento de arrebato, para dirimir un pleito por la fuerza o la intimidación. ¿Y qué decir de las víctimas de las balas perdidas: un tiro al aire, que no va dirigido a ningún blanco, que sólo pretende darle salida a las emociones de quien dispara, termina con una vida o causa daños físicos irreversibles? ¿Basta con inscribir las armas en un registro legal? La respuesta es negativa.

El gobierno ha expresado que no tiene la voluntad política para apoyar el desarme de la sociedad salvadoreña, pues considera que no es una meta realista. Particularmente, el presidente Elías Antonio Saca afirma que no se puede desarmar a las "personas honradas": "en el caso de la *despistolización,* no estoy de acuerdo, por una razón fundamental: yo creo que no debemos quitarles las armas a las personas honestas... ¿por qué razón se las vamos a quitar frente al deshonesto, al pícaro, al sinvergüenza que circula por las calles con armas ilegales?"

Esto significa admitir que el problema de la violencia (que el gobierno entiende únicamente como violencia delincuencial) está completamente fuera del control de las autoridades y que, por tanto, es necesario que cada "persona honrada" vele por su seguridad.

La llamada *despistolización* puede ser un objetivo realista si cumple con una serie de

condiciones: en primer lugar, la restricción absoluta de las armas de fuego. Esto nos lleva al segundo punto: la circulación de las armas ha llegado a unos márgenes de descontrol, porque es un negocio rentable. No basta con apresar pandilleros y quitarles sus armas, o con hacer retenes en las carreteras para decomisar armas que no estén registradas, si no se ataca el problema desde una de sus raíces. Hay un poderoso comercio de armas, tanto legales como ilegales. Habría que ver a quienes beneficia este comercio.

Pero la industria de las armas no termina aquí. Por la misma incertidumbre ante la violencia, ha florecido el negocio de las compañías de seguridad, muchas veces sin mayores regulaciones por parte de las autoridades. Limitar la circulación de armas, no con medidas necesarias, pero paliativas, como los decomisos, sino desde el comercio de las mismas, seguramente tocará muchos intereses. No se explica de otra forma el que únicamente las personas que trabajan en compañías de seguridad pueden llevar consigo armas en el transporte público, según las reformas propuestas a la Ley de armas.

Una experiencia digna de imitar

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador (PNUD), afirma, en su página de Internet (www.pnud.org.sv), que en el municipio de San Martín, "entre noviembre de 2005 y marzo de 2006, según datos oficiales, los homicidios disminuyeron un 40,74% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero no sólo se redujeron significativamente los asesinatos, sino que la violencia con arma de fuego se redujo en un 27,27% y los delitos en general (homicidios, homicidios tentados, lesiones, robos, robos de vehículos, disparo de armas de fuego, amenazas y violaciones) pasaron de 68 a 48. Además se decomisaron 75 armas de fuego y se verificaron casi 1.200."

Esto no se dio por arte de magia. Fue el resultado de un trabajo conjunto del PNUD con la alcaldía y las autoridades policiales. Se dispuso una normativa en la que se proscribía la portación de armas en lugares públicos, junto a un trabajo de diagnóstico de las zonas más violentas del municipio. El énfasis se cargó más en la prevención de la violencia que en su represión.

La concepción del proyecto "Municipios libres de armas", en el que se incluye la experiencia de San Martín, es radicalmente distinta a la de las reformas que el partido oficial quiere implementar a la Ley de armas. La diferencia entre ambas es que, aunque sea una experiencia todavía incipiente, el proyecto "Municipios libres de armas" encara el problema desde sus causas. Hay una gran violencia en nuestra sociedad, en buena medida porque hay canales de sobra para exacerbarla. Si para tener un arma basta con tener una serie de solvencias y de documentos, no hay nada que le impida armarse a nadie. Esto es grave, sobre todo si se toma en cuenta que, según encuestas del PNUD, un 40% de la población masculina en El Salvador desearía tener un arma para defenderse.

Está claro que la erradicación de la violencia en el país pasa por el desarme de la sociedad. Sin embargo, esta tarea, que presenta aspectos muy complejos –por ejemplo, no basta con campañas como la que ofrecía intercambiar alimentos por armas o con alardes de fuerza policial—, pasa por tocar aspectos institucionales, legales, económicos y educativos, entre otros. De lo contrario, la Ley de armas será nada más mera propaganda.

Los movimientos políticos de cara a 2009

Las llamadas "elecciones del siglo" de 1994 se caracterizaron por ser comicios generales; es decir, todos los cargos públicos de elección popular —presidente de la República, diputados del Órgano Legislativo y gobiernos municipales— estaban en juego. Debido al diseño institucional vigente, en 2009 se efectuarán de nuevo elecciones concurrentes. El futuro suceso no ha pasado desapercibido para los partidos políticos, pues algunos han planteado ya cambios en los procesos electorales. En algún sentido, ya están fijando sus estrategias a fin de obtener o mantener, según sea el caso, sus respectivas cuotas de poder. En este contexto, no es de extrañar que el presidente Saca haya manifestado en diversas ocasiones la necesidad de aprovechar el evento electoral de 2009 para igualar el mandato de las alcaldías y diputados a cinco años, o sea, hacer que coincida con el periodo del mandato presidencial. Su planteamiento ha recibido el apoyo de sectores como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), que también señalaba la necesidad de regular el financiamiento de las campañas electorales y el tiempo de acceso de los partidos a los medios de comunicación.

Pese al deseo del ejecutivo, la anterior legislatura aprobó una reforma constitucional que, de ser ratificada, permitiría adelantar a 2008 las elecciones municipales y legislativas. Sin embargo, para que ello suceda se requieren los votos del FMLN, que no ha mostrado voluntad para apoyar esa idea. A continuación, analizamos los posibles escenarios que pudieran presentarse en el futuro y ponemos en perspectiva las posturas del PCN y de ARENA.

Elecciones concurrentes e igual mandato

A los gobiernos municipales, la extensión del mandato les beneficiaría en la medida en que podrían implementar proyectos a largo plazo. En términos legislativos, esta opción plantearía al menos dos panoramas. En el primero podría ocurrir que el partido que gane el ejecutivo obtenga una mayoría en el pleno, aunque la historia indica que desde los años 80, sólo ha habido dos situaciones semejantes, en las cuales el ejecutivo tuvo serias dificultades para implementar sus políticas. Si esto llegara a suceder, el ejecutivo tendría libre el camino para realizar sus planes, lo cual dejaría a la oposición sin oportunidades de actuar.

El segundo panorama sería que el partido en el ejecutivo no obtenga mayoría en el legislativo y, por tanto, necesite de alianzas con otras fuerzas para llevar a cabo sus propuestas. Ello, siempre y cuando, esa otra fuerza haya obtenido un número considerable de escaños que le permitan tomar medidas sin recurrir a la oposición. Planteado así, aumentarían las posibilidades de diálogo entre los institutos políticos. Cualquiera de los dos panoramas permanecería fijo durante todo el mandato; es decir, en el primer caso la capacidad de control de la oposición sería difícil. En el segundo, la creación de consensos tendría que primar como posibilidad.

Cálculos políticos de la derecha

Ante estos escenarios, el FMLN se ha mostrado conforme con el mantenimiento de las elecciones generales y la igualdad en el mandato. Por su lado, ARENA ha brindado una doble postura. La fracción legislativa apoyaría el adelanto de los comicios municipales y legislativos. Sin embargo, Saca ha insistido en la necesidad de igualar los mandatos, lo cual supone el mantenimiento de las elecciones concurrentes tal como correspondería. Los argumentos del mandatario para ejecutar elecciones generales son certeros: los altos costos financieros que supone la realización periódica de comicios y el desgaste e incertidumbre que estos dejan en la población. Además, El Salvador es uno de los países de la región que realiza con mayor periodicidad

eventos electorales. En ese sentido, instaurar ese cambio en el sistema electoral supondría, en principio, mayor eficiencia en la administración de recursos y en el esfuerzo logístico.

Es de hacer notar que en el caso de estos partidos mayoritarios, las elecciones generales suponen un énfasis en las figuras presidenciales. Así, a ambos les conviene este hecho, pues usualmente, en este tipo de comicios la estrategia implementada es "arrastrar" votos a partir del candidato presidencial. Ahora bien, ante el desgaste de ambos institutos, su mayor reto será presentar un candidato idóneo, así como un programa de gobierno viable y acorde a las necesidades de la población.

Ante las elecciones de 2009, el PCN ha expresado su preocupación y propone, al contrario, adelantar los comicios a 2008, bajo el pretexto de que en elecciones generales, los candidatos presidenciales acaparan la atención. En ese sentido, aseguran que correrían el peligro de desaparecer del sistema político, lo cual dejaría al país sin una "tercera fuerza" capaz de "despolarizar" al sistema. Sin embargo, la razón de fondo es que el PCN teme perder sus cuotas de poder, sin importar si ayuda a "despolarizar" el sistema, tarea que falta comprobar aún.

Los resultados electorales para alcaldes y diputados han demostrado que, desde los años 90, el PCN se ha convertido en la tercera fuerza dentro del sistema político, hecho que le ha favorecido sobre todo en la obtención de escaños. Ello ha potenciado su maridaje con ARENA, por medio del cual aquel obtiene favores a cambio de apoyos para las medidas de ARENA y, los proyectos presentados por el Ejecutivo.

En el ámbito municipal, el PCN ha demostrado un rendimiento constante en algunos territorios, lo cual hace suponer que cuenta con una clientela electoral, si bien mínima, al menos fiel al partido. En ese sentido, pudiera conservar sus feudos actuales. El PCN, pues, tampoco desaparecería en este ámbito.

En esa línea, su propuesta de adelantar las elecciones municipales y legislativas no concordaría con su temor a desaparecer, pues igual participaría en las elecciones presidenciales, quizás fortalecido por los posibles resultados de 2008, pero en condiciones adversas ante ARENA y el FMLN. Dicho esto, detrás del miedo del PCN se encuentra no una voluntad por "despolarizar" la situación política, tal como plantean, sino el miedo a perder sus cuotas de poder en algunos puestos clave y en territorios en los que está arraigado. Lo que en verdad busca es afianzar en 2008 algunos cargos públicos. De igual forma, adelantando estos comicios la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa puede favorecer al partido ARENA y continuar con su maridaje. ARENA, si gana las elecciones presidenciales, también garantizaría apoyos al ejecutivo. En el fondo, pues, ARENA sabe que en 2009 la contienda será fuerte en contra del FMLN y una forma de garantizar su mayor injerencia —a sabiendas del efecto arrastre— es logrando una configuración legislativa favorable desde 2008. Así, evitaría que el FMLN obtenga mayor presencia en ese órgano, al menos durante los primeros tres años del posible gobierno arenero.

Mientras ambos partidos sean beneficiados, mantendrán su postura de las elecciones adelantadas bajo la excusa del pluralismo político y la capacidad de "despolarización" que dice tener el PCN. Por tanto, mientras el PCN conserve sus vínculos con ARENA y el TSE responda no a los intereses generales, sino a los partidarios, díficilmente desaparecerá del mapa político. En lugar de ello, el PCN debiera mostrar una actitud más favorable al diálogo y dejar a un lado, como lo ha hecho en algunas ocasiones, su fiel vínculo con ARENA. Al no ser un aliado incondicional de este, el PCN contribuiría a que el FMLN y ARENA dialoguen y negocien. Sin embargo, se hace notable que esta voluntad no encuentra asidero en ese instituto político.

Condiciones económicas y violencia política

Los acontecimientos del 5 de julio en las proximidades de la Universidad de El Salvador (UES) conmocionaron a los salvadoreños. Después de los disturbios que desembocaron en la muerte de dos agentes de la UMO, la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos iniciaron el análisis de los hechos para deducir responsabilidades. En el marco de esos acontecimientos, el jueves, la fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa impulsó la aprobación de la ley especial contra los actos de terrorismo, por considerar que esa normativa es la más apropiada para tratar a las personas implicadas en los acontecimientos referidos. Las demás fracciones legislativas no estuvieron de acuerdo en la aprobación de la ley, y mejor optaron por crear una comisión especial que estudie la normativa para presentarla al pleno quince días después con una serie de recomendaciones.

Definitivamente, es importante investigar los hechos y castigar a los actores materiales e intelectuales de los acontecimientos del 5 julio. Sin embargo, sería un error pensar que las penas a los agresores bastarán para solucionar los problemas sociales que, en cierta forma, empujaron a la marcha de protesta efectuada ese día. Y es que para el Ejecutivo el problema fundamental sobre lo acontecido es únicamente de tipo legal. Tan es así, que en este contexto, el Ejecutivo ve la oportunidad de impulsar cambios en la ley penal y de introducir una nueva ley que combata los actos de terrorismo. Parece que el gobierno no comprende que la mala situación económica empuja, en cierta forma, a que una parte de la población a exprese su descontento en manifestaciones que muchas veces bordean la ilegalidad. Ahora bien, este descontento no debe expresarse jamás mediante el uso de armas y en la destrucción de la propiedad privada, sino que debe ser concretado en protestas pacíficas que no atenten contra la vida y pertenencias de las personas.

Desde hace varios años, las características más sobresalientes de la economía salvadoreña han sido el bajo crecimiento económico y la concomitante alza en el nivel de precios. Para el gobierno, ambos problemas se deben a una misma razón: el alza de los precios del petróleo a nivel internacional. Ante esta realidad, el gobierno ha sido claro al decir constantemente que sólo resta esperar una estabilización de los precios internacionales del crudo y, que mientras tanto, se debe hacer uso racional de la energía. En otras palabras, en un sistema de mercado, el Estado no debe de intervenir en el funcionamiento de la economía —no importan las penurias que esté pasando la mayoría de salvadoreños–, ya que esa intervención lo que hará es entorpecer el proceso de asignación óptima de recursos. Así las cosas, mientras haya un alza imparable en los precios del crudo a nivel internacional, las probabilidades de despegue económico y de mejoras en las condiciones económicas y sociales para las familias salvadoreñas son mínimas.

En este contexto, el 2006 es un año interesante, por que se han dado, casi simultáneamente, incrementos considerables en las tarifas de energía eléctrica, agua y transporte colectivo. El gobierno ha permitido que las empresas distribuidoras de energía eléctrica, ANDA y los empresarios de transporte colectivo aumenten sus precios en el marco de la difícil situación económica que atraviesa la población desde hace varios años. Lo anterior explica el descontento social, pero no justifica que el mismo deba traducirse en actos violentos que involucre la pérdida de vidas.

El gobierno debe reconocer que su gestión económica está muy por debajo de las expectativas de la población, especialmente de los más pobres. Estos últimos no reciben el

subsidio a la energía eléctrica, por que sus viviendas carecen de conexión eléctrica; tampoco son beneficiados con el subsidio al gas, por que no tienen ingresos para adquirir una cocina. No son beneficiados con las tarifas especiales de ANDA, por que sus viviendas no cuentan con distribución de agua por cañería. Sin embargo, deben utilizar el transporte colectivo para asistir a sus trabajos y obtener unos pocos dólares para sus familias. A ellos les ha perjudicado más fuertemente el incremento en el pasaje de transporte público.

Con lo anterior, no se pretende realizar una relación mecanicista que justifique los hechos acaecidos el pasado 5 de julio. La realización de actos vandálicos y la muerte de personas no son justificables desde ninguna perspectiva. La finalidad es hacer ver al gobierno la necesidad de trabajar por políticas públicas que mitiguen las presiones económicas de la población. Eso pasa, como se ha dicho muchas veces en este semanario, por una revisión de un modelo económico que no está beneficiando a todos los salvadoreños, salvo a una minoría que percibe, de acuerdo a la prosperidad de sus negocios, que todo está bien. Un gobierno responsable no puede decirle a la población que simplemente no se puede hacer nada para enfrentar la difícil situación económica.

Ante los problemas económicos, el gobierno, la empresa privada y la oposición deben trabajar para cambiar la situación. Una de las mejoras formas para paliar la crisis económica de las familias salvadoreñas es mediante el incremento del salario mínimo. Para ello, se necesita principalmente la disposición de la empresa privada y el gobierno a aumentar los salarios de los trabajadores, para que estos puedan ver mejoradas sus condiciones de vida. La oposición, especialmente el FMLN, debe velar por los intereses de los trabajadores, no tanto en las calles, sino en la Asamblea Legislativa. Y es que a veces parece ser que el partido de izquierda canaliza más sus energías en el apoyo a las marchas de organizaciones sociales —sin que esto sea necesariamente malo—, que a la creación de nuevas propuestas en el parlamento. Quizás están más preocupados en mostrar que están cerca de la población al momento de sus demandas, que en presentar resultados tangibles de su trabajo en la Asamblea Legislativa. Ahora que se avecina un alza salarial, el FMLN debe presionar desde el parlamento para que dicho incremento esté acorde al encarecimiento en el costo de la vida, haciendo ver a los empresarios y demás partidos políticos que deben asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

ARENA y el FMLN, en vez de enfrascarse en sus conflictos, deben mostrar un verdadero interés por solucionar los problemas más urgentes del país. Y las disposiciones económicas que pasan por las decisiones parlamentarias son oportunidades para trabajar en conjunto a favor de la población. El resultado de las recientes elecciones de diputados presiona a ambos partidos a trabajar por un consenso sobre el rumbo del país. Pero si la dinámica política en los próximos años es similar a la desatada por los hechos de la semana pasada, los salvadoreños perderán la esperanza de tener un país en paz.

Pero como se dijo anteriormente, no sólo el gobierno y la oposición tienen la responsabilidad de trabajar por mejorar las condiciones económicas; también la empresa privada debe hacer un esfuerzo por mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. Después de los hechos de la semana pasada, muchos empresarios están más preocupados por sus inversiones en el país que en sus trabajadores. Una de las formas de atacar el descontento social que empuja a la inestabilidad política del país consiste en incrementar el salario de los trabajadores. Algunos partidarios del neoliberalismo pueden decir que eso es chantaje. No. Simplemente es el reconocimiento de que si todos los precios en la economía están subiendo constantemente, el precio que se paga en el mercado por la fuerza de trabajo también debe subir. De lo contrario se está condenando a los trabajadores y a las trabajadoras a que vivan en condiciones donde no se pueden satisfacer las necesidades mínimas de vida.

Las políticas gubernamentales de Saca

El pasado 1° de junio, Elías Antonio Saca, se dirigió a la nación para celebrar el segundo aniversario de su gestión presidencial. El mandatario recalcó que el país se encuentra en el camino del desarrollo. Afirmó que "debemos seguir avanzando en el camino del desarrollo y progreso. El Salvador sobresale en América Latina porque somos un país con estabilidad democrática, macroeconómica probada, con atractivos reales para la inversión y con buenas credenciales de estabilidad". Las palabras del presidente estaban encaminadas a justificar las políticas neoliberales realizadas por los pasados gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), así como las de su gobierno, que se supone trabaja con una visión humanista basada en el bien común.

Las políticas públicas ejercidas por los gobiernos de ARENA se caracterizan por la poca o nula intervención del Estado en la economía, la eliminación de la protección industrial y agrícola y el crecimiento económico apuntalado por las remesas y las exportaciones. El Salvador ha sido comandado por más de diecisiete años por el modelo neoliberal de ARENA. Este es un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción. Está controlado por un grupo privilegiado de empresarios vinculados al sector financiero, situación que ha incrementado la polarización de la sociedad entre ricos y pobres. Según datos proporcionados por el Instituto de Opinión Publica de la UCA (IUDOP), un 49% de la población a nivel nacional vive en situación de pobreza, de los cuales un 22% se encuentran en pobreza extrema. Indicadores reales de que las políticas neoliberales ejecutadas por los gobiernos de ARENA no están siendo acordes a la realidad del país.

Las zonas con mayores índices de pobreza extrema se encuentran ubicadas entre los departamentos de Cabañas, Ahuachapán, Morazán, Usulután y Chalatenango. En cada uno de estos departamentos más de un 50% de sus habitantes viven con un dólar diario. Ante esta problemática, el gobierno de Saca busca sacar a la población de esta situación con su política de "red solidaria", la cual brinda una ayuda de entre 10 y 25 dólares mensuales a cada familia. "Ya beneficiamos a más de 13 mil familias, la apuesta es cambiarles la vida a las personas más pobres y desprotegidas", dijo el mandatario en su discurso. La pregunta que surge ante esta medida gubernamental es: ¿proporcionarles 25 dólares mensuales a las familias que viven en situación de pobreza extrema es una política gubernamental que responde a sus necesidades? ¿Es simplemente maquillaje publicitario?.

La falta de empleo, de oportunidades, la inseguridad y la delincuencia propician que más de 700 salvadoreños salgan diariamente del país en busca de mejores condiciones de vida. Para Jesús Aguilar, director del Centro de Recursos para América Central (CARECEN), "si la población opta por emigrar es por que en el país no existen políticas laborales justas". A dos años del gobierno de Saca, pues, la emigración hacía Estados Unidos se mantiene ascendente. "La política migratoria debe ir en consonancia con los esfuerzos que realizamos a nivel nacional, para procurar oportunidades para todos y generar condiciones económicas y sociales, que mejoren las condiciones de vida de nuestra población", fueron las palabras del mandatario en el discurso de su segundo año de gestión.

Fácilmente se interpreta que la política de Saca va enfocada en mantener los más de 2 millones de connacionales en los

Estados Unidos para que éstos generen mayores beneficios a sus familias y a la vez incrementen el consumo nacional. Bajo ésta lógica se plantean las siguientes preguntas: ¿será que las políticas gubernamentales consisten en propiciar deficiencias sociales y económicas? ¿Qué será prioritario para el gobierno de Saca, crear fuentes de empleo digno para que los y las salvadoreñas no tengan que dejar su país o mantener los mismos índices de emigrantes y residentes en los Estados Unidos?

Por otra parte, los bajos salarios están generando déficit en las economías de los hogares salvadoreños. Por ejemplo, los sueldos en el sector maquila e industria rondan los 148 dólares mensuales, con los cuales las familias deben suplir sus necesidades básicas; es decir, pagar la renta, la canasta básica, y servicios públicos. Ante está situación, el presidente Saca afirmó en su discurso: "una de nuestras principales tareas ha sido la creación de oportunidades de negocios y empleos a través de la apertura comercial".

Si bien es cierto que algunos sectores se han visto beneficiados con empleos, existe una gran mayoría de salvadoreños desocupados. De ahí que surja la siguiente pregunta: ¿son trabajos dignos aquellos en los que los empleados laboran más de 8 horas diarias y reciben un sueldo de 148 dólares mensuales? Dicho en otras palabras, que el gobierno les permita a las transnacionales una desvalorización de la mano de obra, ¿significa esto generar oportunidades para las y los salvadoreños?

Por simple cálculo estos ingresos son insuficientes para que las familias subsistan ante el alto costo de la vida. Para muestra, las grandes mayorías han perdido la garantía de mejoras económicas, lo cual se refleja en el poder adquisitivo. Sin embargo, el sector trabajador exige una mejora salarial, a lo que el mandatario respondió: "haremos una revisión a la tasa salarial con los sectores involucrados". Una respuesta inconsecuente ante la demanda del sector asalariado. Ahora resta esperar a que el incremento al salario mínimo sea mayor al 30%, para que pueda desahogar la economía de los hogares salvadoreños y no sea de un 10% como lo anunció en un programa nacional la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Porque de ser este último cierto, ¿alcanzarán catorce dólares a suplir los incrementos del 20% al pasaje, el 14% a la energía eléctrica, por citar dos de los incrementos que se están realizando en los servicios públicos en la actualidad? ¿Qué hace el gobierno para regularlos?

En definitiva, las políticas económicas del gobierno de Saca no benefician a las grandes mayorías, sino sólo a una minoría. Saca gobierna, pues, para esa minoría. Si no fuera así, el país no estaría con los altos índices de pobreza, delincuencia, violencia, desempleo y migración.

En conclusión, el eslogan presidencial dice algo muy cierto: "Un país unido tiene sentido"; y este otro: "Unidos lo podemos lograr". Si en verdad el gobierno de Saca está interesado en lograr un país unido y un gobierno con sentido humano, debe, en primer lugar, mostrar voluntad política para solventar las necesidades que aquejan a las grandes mayorías. Luego, dialogar con todos los sectores políticos en busca de la estabilidad nacional, crear políticas públicas que se ajusten a la realidad de las mayorías y, finalmente, ejercer un papel más protagónico en la regulación de la economía nacional.

Una “cloaca” por destapar

En un país pobre como éste, se deben distribuir bien los recursos. De ahí la importancia de contar con buenos administradores en el aparato estatal, capaces de identificar qué partidas presupuestarias deben fortalecerse en favor de la población más vulnerable. Pero El Salvador es prueba de que no siempre se hace lo que la lógica indica. Resulta que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) se puede dar el lujo de buscar un técnico que devengue entre quince y veinte mil dólares mensuales, aunque la Policía Nacional Civil (PNC) no tenga fondos para fortalecerse en el ámbito de la investigación científica del delito o que la Corte Suprema de Justicia —por la misma causa— no repare el laboratorio para realizar pruebas de ADN. De los más de diez homicidios diarios en el país, muchos no se aclaran por falta de equipo tecnológico y capacidad policial. Sin embargo, para quienes “planifican” el gasto público, lo realmente importante es el entrenador de una fracasada selección de fútbol. Si es mejicano u holandés, no importa; lo que interesa es el beneficio partidista electoral para el 2009. Mientras, los criminales continuarán evadiendo la justicia, el Ejecutivo seguirá echándole la culpa a un grupo de jueces, casi nadie cuestionará la incapacidad del Estado y se desperdiciarán quince o veinte mil dólares mensuales en algo que no es prioritario.

Pero el problema no sólo es las prioridades presupuestarias. En la “cosa pública” también hay ilusionistas capaces de “desaparecer” grandes cantidades de dinero, sacos de abono, instrumentos musicales y medicamentos costosos, entre algunas prácticas. No dejan huella del chanchullo y también desaparecen sus responsables cuando alguien logra detectarlo. En el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), por ejemplo, se derrocharon más de treinta y cuatro millones de dólares en otorgar créditos para operaciones relacionadas con el Ingenio “El Carmen”, que estaba sobrevaluado y con un gran déficit económico; también se “extraviaron” más de once mil sacos de abono, donados por el gobierno japonés para apoyar al sector agrícola. En el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) pasó lo mismo: varios instrumentos musicales fueron entregados por Japón a la Orquesta Sinfónica Nacional y nadie sabe dónde están ahora.

Más casos. En la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se manosearon licitaciones; producto de ello, Carlos Perla y Mario Orellana se quedaron con más de seis millones de dólares. Al menos, esa es la versión oficial. Se dice que ambos manipularon procesos de compra para beneficiar a un empresario español, quien ganó dichas licitaciones pese a que su oferta era mucho más cara que las otras. Así, aumentaron las dificultades para solucionar los problemas de distribución de agua potable en perjuicio de las mayorías populares.

Romeo Majano Araujo fue otro ladrón de cuello blanco. Este antiguo director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), declaró desierta varias licitaciones para negociar directamente con la Droguería “Santa Lucía” —de la cual era directivo el ex presidente Alfredo Cristiani— y otras empresas fantasmas. Así malversó casi siete mil millones de dólares, alterando las facturas de manera desmedida y descarada.

A la corrupción se suma el despilfarro del erario nacional. Acá un kilómetro de carretera es dos veces más caro que en las naciones vecinas, pues el Ministerio de Obras Públicas negocia mal los contratos. ¿A qué se debe? ¿Será negligencia o por favorecer intereses de ciertas compañías constructoras? Estas últimas cuentan con un mecanismo llamado “órdenes de cambio”, a través del cual los contratistas renegocian el valor de los proyectos y logran encarecerlo a niveles asombrosos.

Pero también hay corrupción cuando los funcionarios sacan provecho de sus cargos. Miguel Lacayo, ministro de Economía en la presidencia de Francisco Flores, se recetó exenciones de aranceles para importar algunos componentes necesarios en la fabricación de baterías. Lacayo era presidente de Baterías de El Salvador cuando

eso pasó; aunque dijo que se tomó la medida para contrarrestar un desabastecimiento de materia prima, el entonces gerente de mercadeo y ventas de la empresa afirmó que nunca hubo tal carencia "ni siquiera en tiempos de guerra, porque siempre hubo una política bastante sana de inventarios". También Luis Cardenal, primer ministro de Turismo en el país dentro de la actual administración del Ejecutivo, fue acusado de aprovecharse del cargo para ganar una licitación con Aserradero El Triunfo, su empresa. Cardenal alegó ignorar la prohibición para ofertar bienes o servicios a los funcionarios estatales; su excusa no vale, pues nadie en su defensa puede alegar desconocimiento de la ley.

Por desgracia para el país y su gente, ese tipo de hechos continúa. Ahora resulta que en la Aduana San Bartolo se incineró un paquete de medicinas para enfermos de leucemia, donado por "Novartis" y con un costo de trescientos ochenta mil dólares. Estas sustancias eran de vital importancia para tratar a personas enfermas, porque permite prolongarles la vida y mejorar su salud. Con todo los ejemplos planteados antes y frente a la oscuridad que rodea la supuesta "destrucción" del lote de medicamentos, no es extraño dudar de la versión dada y especular que fue robado para venderlo. De hecho, una investigación del donante apunta a que el fármaco se está comercializando.

Este último caso refleja que en el país la gente más desamparada, como siempre, es la que sufre más con la corrupción. Le perjudica la falta de un medicamento que no puede pagar. El desvío ilegal o no de recursos también le afecta, porque no se invierten en su progreso. Los cuantiosos fondos robados por Romeo Majano Araujo, Carlos Perla, Mario Orellana y Raúl García Prieto, entre otros, así como los impuestos que el ex ministro Lacayo dejó de pagar, hubieran servido bien para mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven en la miseria. Aumentar la red de salud pública, ampliar la cobertura educativa y dar acceso a créditos blandos para comprar viviendas, son algunos proyectos que se pudieron haber impulsado con esos millones de dólares saqueados de las arcas estatales.

No hay dónde perderse: la corrupción es un mal que niega la vigencia de los derechos humanos de la población. Pero, además, hunde a las instituciones que no la enfrentan y superan. El actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, tiene ante sí un desafío que Belisario Artiga —su antecesor— no pudo encarar: combatir con éxito ese delito. El caso reciente de las medicinas perdidas y otros de ese tipo pueden servir para mostrar capacidad y voluntad en el establecimiento de todas las responsabilidades, con una buena investigación sólida y fundamentada que sirva para castigar ejemplarmente y advertir a los corruptos. Si no, esa lacra continuará sangrando el presupuesto del país como ha ocurrido durante décadas.

Beneficiarse del poder para cometer delitos de "cuello blanco" ha sido una constante en los gobiernos salvadoreños, desde antes de la guerra. Pero hay quien dice que lo de antes era un juego infantil al compararlo con lo que ahora sucede. La promesa de erradicar ese mal ha contribuido al triunfo de varios candidatos en la competencia por la titularidad del Ejecutivo. No obstante, este país es el único en América Latina donde no se ha denunciado e investigado en los medios y en las instituciones estatales, por corrupción, a un presidente o ex presidente de la República; ni siquiera a un ministro o ex ministro de gabinete.

¿Será que El Salvador es el paraíso terrenal de la honestidad, la probidad, la ética y la transparencia? ¡Por favor! Es porque al poder económico, político y mediático —esa perversísima alianza de tres caras distintas y un solo poder verdadero— no se le puede "contar las costillas". Controlan todo para asegurar que la "cloaca" permanezca sellada con una, hasta hoy, compacta tapadera llamada "institucionalidad"; en ésta destacan la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas, pero también forman parte la PNC y el Órgano Judicial. Hay que insistir entonces: el recién nombrado Fiscal General, Félix Garrid Safie, puede pasar mal a la historia como su antecesor o bien si decide destapar esa "cloaca". Sabiendo que no es fácil, el IDHUCA y las víctimas de la corrupción que acuden al mismo, quieren ayudarle en esa tarea vital para el desarrollo del país y la vigencia de los derechos humanos. Además, así estaría sentando un precedente inédito e importante de combate a la más alta impunidad.

Que el pueblo de Dios haga sentir su voz en la V Conferencia de Obispos de América Latina en Aparecida, Brasil

En mayo del 2007, en Aparecida, Brasil, tendrá lugar la V Conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe. Se reunirán más de 150 obispos, una treintena de religiosos y laicos, y más de una decena de sacerdotes diocesanos. El CELAM publicó ya el 8 de septiembre de 2005 un documento con el título *Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que en él nuestros pueblos tengan vida. "Yo soy el camino, la verdad y la vida".* El CELAM lo llama *Documento de participación*, y pide explícitamente que de todas las iglesias latinoamericanas se envíen aportes para elaborar después, a finales de este año, un *Documento Síntesis*. Esa será la base para el trabajo en la V Conferencia. Ante esta invitación es importante la disposición a activa a aportar al documento, sobre todo las comunidades

1. Echando la vista atrás, hay que recordar el interés de Monseñor Romero de llevar a Puebla —la III Conferencia en 1979—, más que sus propias ideas *la realidad de la Iglesia salvadoreña*. "Una Iglesia tan viva, tan llena del Espíritu", como dijo en la homilía la víspera de viajar a México —eucaristía, por cierto, en la que denunció el asesinato del Padre Octavio Ortiz y de cuatro jóvenes. Y además, quiso recoger el sentir y pensar de sacerdotes y laicos, actitud habitual en él, siempre que tenía que decir una palabra importante —recuérdese que, meses después, antes de escribir su última carta pastoral, envió una encuesta a todas las parroquias. En la carta, recogió muchas de las respuestas de las comunidades, y sobre todo su espíritu.

De esa Iglesia venimos, aunque después fue perdiendo fuerza, también en escuchar y pedir a todos, sacerdotes y laicos, su opinión sobre cosas importantes. De hecho, en la preparación de la IV Conferencia en Santo Domingo, la Iglesia salvadoreña no estuvo prácticamente presente. Pero en varias comunidades se siguen reuniendo para analizar la realidad del país y de la Iglesia. "Sean micrófonos de Dios", alentaba Monseñor a las comunidades. A esa Iglesia hay que volver.

2. Aparecida será la Quinta Conferencia, y es importante ponerla en perspectiva histórica. La I Conferencia se celebró en Río de Janeiro en 1955. Era una época de neocristiandad. La Iglesia estaba anclada en la tradición y a la defensiva ante el mundo moderno emergente, más dada a condenarlo que a comprenderlo, a estar en el centro y ser servida por el mundo que a estar dentro de él y a su servicio para salvar. Todavía no había tenido lugar el Vaticano II.

La II Conferencia, en Medellín, 1968, supuso un quiebre fundamental en la historia de la Iglesia latinoamericana. En las huellas del Vaticano II tuvo la audacia de preguntarse con gran honradez por la realidad de este mundo, el terrible pecado social de injusticia, a manos de los opresores, y la esperanza de los oprimidos. Al mismo tiempo se preguntó por la presencia de Dios en ese mundo, en "los signos de los tiempos", y se preguntó también con inmensa radicalidad qué es lo que la Iglesia debe hacer. La respuesta a todas estas preguntas tiene en su centro a "los pobres". De Medellín viene "la opción por los pobres" en la pastoral, en la teología y en la fe: Ha sido la gracia mayor del continente, de la que todavía vivimos y a la que hay que volver siempre.

La III Conferencia tuvo lugar en Puebla en 1979. Comenzaba la involución eclesial, pero Puebla logró mantener vivo lo sustancial de Medellín, mencionando, además, los rostros de los pobres y poniendo nombre teológico a sus opresores: los ídolos. Y recogió gozosa y trágicamente, las consecuencias de la opción por los pobres: conflicto, persecución y martirio, que ya eran ya inocultables. Y en Puebla sí estuvo muy presente la Iglesia salvadoreña, representada por Monseñor Romero.

La IV Conferencia tuvo lugar en Santo Domingo, en 1992. La involución eclesial era ya inocultable y también el centralismo romano. Casi había desaparecido la generación de los grandes obispos latinoamericanos, nuestros "Padres de la Iglesia". Varios de ellos habían muerto asesinados, Enrique Angelelli en Argentina, Oscar Romero y Joaquín Ramos en El Salvador, Juan Gerardi en Guatemala —y no hay que olvidar como clamoroso acontecimiento simbólico la prisión de 17 obispos en Riobamba, Ecuador, en 1976. Y desde Roma llegó la desestructuración de la CLAR, los graves ataques a la teología de la liberación y el rechazo efectivo a las comunidades eclesiales de base a favor de los movimientos de corte espiritualista. En este ambiente no se podía esperar mucho de Santo Domingo, "ni los obispos de antes" fueron con mucho ánimo. Supuso un serio freno a Medellín, de lo cual todavía nos estamos recuperando. Pero sí se mencionaron nuevos rostros de los pobres (indígenas, afros…) y se avanzó, al menos de palabra, en la exigencia de inculturación.

3. ¿Y cómo estamos ahora? Por un lado, el *Documento de participación* ha desilusionado. Valgan por muchas, las críticas de Monseñor Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia, que lleva años trabajando en Santa Cruz, Bolivia. Lo critica con agudeza y libertad, y exige una vuelta a la profecía y a la opción por los pobres, al evangelio y Medellín. Los teólogos, por su parte, han criticado la ausencia del Jesús histórico, el de Nazaret del reino de Dios, lo cual resulta increíble si se quiere preparar bien una conferencia sobre la misión de la Iglesia. Don Pedro Casaldáliga, con profecía y humor, hace suya la ironía de un teólogo: el texto de consulta "resulta muy poco estimulante, como escrito por 'teólogos que ya están en el cielo'".

Por otro lado, se percibe algo nuevo. "No se puede seguir así, desentendidos del pueblo y excesivamente pendientes de lo que viene del centro", parecen decir algunos obispos. Volvamos a la alegría de ser cristianos y a la audacia y compromiso de Medellín", lo que puede corresponder a un nuevo estilo del Vaticano. La Conferencia episcopal de Brasil, la de mayor liderazgo en América Latina, ya ha elegido a sus veintidós delegados. Desilusionada por el excesivo centralismo romano, parece ahora animada a retomar el rumbo.

También han aparecido algunas reflexiones de teólogos. Sobre el *Documento de participación* son muy críticos, pero presentan propuestas alternativas alrededor de tres temas: 1) volver a la creatividad de Medellín, los signos de los tiempos hoy, la opción por los pobres, la justicia… 2) volver a la Iglesia pueblo de Dios, a las comunidades de base, para contrarrestar el excesivo protagonismo jerárquico, y el espiritualismo desencarnado, incluso infantilismo, al que suelen llevar los movimientos; replantear los nuevos ministerios laicales, los de la mujer… 3) mantener y actualizar la experiencia de Dios y de los mártires, el seguimiento de Jesús, la solidaridad, que han producido dos generaciones de cristianos y cristianas.

4. Las comunidades salvadoreñas, las que mantienen la herencia de las comunidades de base, pueden aportar mucho a la V Conferencia. Y ojalá lo hagan. Su presencia no es hoy muy reconocida, ni su voz es muy oída, pero tienen experiencia. Como milagro

de la gracia, permanecen al menos como brasas de un antiguo fuego. Ojalá respondan a preguntas como éstas:

a) Cómo ven la Iglesia salvadoreña, lo que ésta hace mirando al mundo y a su interior; cuáles son sus mayores problemas y sus mayores logros.

b) Cómo quieren que sea la Iglesia, a la luz del evangelio, de sus mejores recuerdos de Monseñor y de los mártires, de la solidaridad, la entrega, la esperanza y la fe en Dios, que tanto ha abundando.

c) Qué pueden ellas —con todos los demás— aportar a un nuevo renacimiento eclesial.

El Padre Ellacuría decía: "es necesario que el pueblo salvadoreño deje sentir su voz". Ahora es también el momento de que "el pueblo de Dios deje sentir la suya en la Iglesia latinoamericana". Y no olvidemos las palabras de Monseñor: "cada uno de ustedes tiene que ser un micrófono de Dios".

Que Aparecida sea un paso adelante, un acontecimiento verdaderamente cristiano y verdaderamente latinoamericano, dependerá de muchas cosas y de mucha gente. Harán análisis y propondrán estrategias. Pero la clave estará, pensamos, quizás de forma escondida, pero real, en las comunidades de gente pobre. Son los hombres y mujeres más cercanos a la realidad, y quienes tienen a Dios más cercano.

Jon Sobrino

El semanario *Proceso* selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más significativos para la realidad salvadoreña, a fin de analizar las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación. *Proceso* es una publicación del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

Correo electrónico	$ 50.00
El Salvador	
personal	$ 15.00
correo	$ 20.00
Centro América y Panamá	$ 35.00
Norte y Sur América	$ 65.00
Europa y otras regiones	$ 85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre *Proceso* marque (503) 2210-6671 o escríbanos a **cidai@cidai.uca.edu.sv**